



Objeción de conciencia y servicio militar obligatorio

10

Balance de las recomendaciones anteriores

Croacia acogió con beneplácito el progreso logrado hasta el 2018 y alentó al Gobierno a realizar mayores esfuerzos en el tema de objeción de conciencia al servicio militar y recomendó a Colombia “Establecer un procedimiento independiente e imparcial de aplicación y toma de decisiones para la implementación del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar”.

Si bien en 2017 la objeción de conciencia fue incluida dentro de las causales de exoneración al servicio militar obligatorio través de la Ley 1861 de 2017, su implementación en Colombia no ha tenido en cuenta las recomendaciones de los pasados ciclos sobre la garantías del derecho a la objeción de conciencia, pues hay un desequilibrio de poderes en el marco de los procedimientos que deben hacer los jóvenes para la definición de su situación militar, sin el cumplimiento de las reglas del debido proceso y con sesgos en los procedimientos usados por el cuerpo decisorio que fue creado para decidir sobre las solicitudes de objetores de conciencia.

Mientras exista el servicio militar obligatorio (SMO) el Estado seguirá exigiendo altas cuotas de reclutamiento, lo cual hace muy difícil la aplicación de un procedimiento independiente e imparcial para la toma de decisiones en la implementación del derecho a la objeción de conciencia, generando detenciones arbitrarias y efectos negativos para el ejercicio de los derechos y libertades de los adolescentes y jóvenes.

Desafíos

Servicio Social para la Paz y relación con la esfera militar
Preocupa la actual regulación del Servicio Social para la Paz, como alternativa al servicio militar, porque podría otorgar más facultades al Ministerio de Defensa, repercutiendo en la reducción de garantías de imparcialidad e independencia para los objetores de conciencia. Esta opción debería estar a cargo de una entidad civil que brinde garantías a los derechos de la juventud colombiana.

La objeción de conciencia no cuenta con un estatus de Derecho Fundamental. Si bien, después de la sanción de la Ley 1861 de 2017 han incrementado las solicitudes de jóvenes para resolver su situación militar como objetores de conciencia, las instancias militares siguen limitando este derecho para los objetores por razones políticas o éticas, al exigir que se pruebe de forma exacerbada este derecho, y emitiendo respuestas negativas sin sustento legal.

Procesos inadecuados para los objetores de conciencia. La Comisión interdisciplinaria que evalúa técnica y jurídicamente las solicitudes de los objetores de conciencia, conformada por 4 integrantes del Ministerio de Defensa y un representante del Ministerio Público, no cumple con los estándares internacionales de imparcialidad e independencia.

El representante del Ministerio Público sólo cumple un rol de garante del debido proceso dentro de la Comisión interdisciplinaria, en consecuencia, la decisión de fondo es tomada por los integrantes del Ministerio de Defensa; la cual no incorpora criterios técnicos, ni jurídicos serios para aceptar o rechazar la solicitud del objetor de conciencia, dejando el reconocimiento del derecho a discrecionalidad de la autoridad militar.

Además de la ausencia de imparcialidad, se genera una violación por parte de estos comités al principio de buena fe que debe guiar la apreciación de las razones del objetor “los criterios aplicados deben ser razonables y toda la información solicitada debe ser pertinente para la cuestión. (...)”.

Libreta Militar como condicionante de derechos. La definición de la situación militar se centra en la tenencia de una libreta militar que vulnera los derechos civiles y políticos, además de una discriminación frente a las garantías de derechos Económicos, Sociales y Culturales que derivan del acceso al trabajo y mínimo vital de la población juvenil. Por tal razón, los objetores de conciencia en muchas ocasiones se han visto obligados a: i) desistir del reconocimiento formal debido a las dilaciones y obstáculos ii) aceptar su clasificación como no aptos para prestar el servicio militar mediante conceptos de carácter psico-físico, iii) no poder acceder a un trabajo formal o iv) comprar la libreta militar, lo cual es una acción ilegal. En todos los casos la libreta sigue siendo un instrumento para militarizar la vida de millones de hombres de sectores socioeconómicos vulnerables.

Las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, falta de garantías al derecho al debido proceso y a la objeción de conciencia. Jóvenes de 18 a 24 años son reclutados de manera permanente para cumplir con altas cuotas de conscriptos establecidas por la institución militar. Para cumplir con estas cuotas, el Ejército realiza jornadas regulares y especiales de reclutamiento e incurre en la omisión del procedimiento para definir situación militar establecida en la ley. Esto constituye la práctica de Detenciones Arbitrarias con Fines de Reclutamiento (DAFR) en la que se vulneran principalmente a sectores discriminados por su apariencia, etnia y clase social.

Recomendaciones

1. Garantizar la implementación de las medidas existentes e impulsar las reformas necesarias para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, en armonía con los estándares internacionales con el propósito de: i) evitar la limitación y vulneración del derecho ii). garantizar la imparcialidad e independencia de la Comisión interdisciplinaria, así como de los criterios técnicos y jurídicos para responder a las solicitudes, iii) garantizar los derechos y libertades juveniles de los objetores de conciencia, a través de la validación de la resolución emitida por la Comisión Interdisciplinaria, evitando que estos sean condicionados a tramitar y portar una libreta militar.
2. Exigir la implementación de medidas para la prevención, prohibición y cese definitivo de prácticas de detención arbitraria con fines de reclutamiento, estableciendo criterios y procedimientos que contribuyan con la investigación y la sanción disciplinaria de los servidores públicos que incurran en estas prácticas.
3. Garantizar la adecuada implementación de la modalidad de servicio social para la paz, para evitar la extralimitación e involucramiento de las Fuerzas Militares en la vida civil de las personas, avanzar en el desmonte gradual de la obligatoriedad del servicio militar y reducir el presupuesto para el sector de defensa, y en cambio se aporte en la implementación del Acuerdo Final de Paz.